

FORMULO RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL

A LA EXCMA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

**JUICIO: “EMPRETUC S.A. S/ QUIEBRA PEDIDA S/ INCIDENTE DE REVISIÓN
(PROMOVIDO POR AFIP-DGI)” - EXPTE N° 983/11-I1**

TORO MARCELO ROLANDO, abogado, matrícula federal tomo N.º 121, folio N°243, representante del Fisco Nacional (AFIP), con domicilio digital en 20203108010, a V.E. respetuosamente digo:

I). - PERSONERIA.

Conforme lo acredito soy representante de AFIP-DGI, en virtud del mandato conferido por esa Administración mediante disposición N° 144/15 publicada en el Boletín Oficial de la Nación en fecha 21/05/2015, oportunamente aportada a la causa.

Por los motivos expuestos, solicito tenga por debidamente acreditada la personería invocada, y por constituido domicilio digital.

II).- OBJETO.-

Por este acto vengo a interponer en tiempo y forma oportuna, Recurso Extraordinario en contra de la sentencia del 05/05/2022 de la Excma. Corte Suprema de Justicia de Tucumán, en cuanto resuelve: “...I.- *DECLARAR INADMISIBLE el recurso de casación deducido por el letrado Toro Marcelo Rolando en representación de la acreedora incidentista AFIP-DGI, en contra la*

sentencia N.º 128 del 01 de marzo de 2021, expedida por la Excma. Cámara Civil y Comercial Común (Sala I). II.- COSTAS, como se consideran..” (las impone a la recurrente vencida).

III).- CONSTITUYO DOMICILIO LEGAL.-

A los fines de la admisión formal, constituyo domicilio legal en calle Junín N° 67 piso 6 oficina “C” de la ciudad de San Miguel de Tucumán, y procesal en casillero de notificaciones N°144.

Asimismo para el caso de que se conceda esta vía recursiva y se eleven las actuaciones a la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación, constituyo domicilio en calle Defensa 192, Entrepiso “B” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

IV).- PROCEDENCIA DEL REMEDIO PROCESAL INTERPUESTO. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD.-

La sentencia que se recurre ha sido notificada a esta parte el 07/05/2022, mediante cédula en casillero de notificaciones, interponiéndose el presente recurso dentro del plazo de diez (10) días previsto por el artículo 257 del C.P.C. y C.N.

Asimismo se deja constancia que se hizo reserva de la cuestión federal y de arbitrariedad, con mantenimiento de los mismos, en todas las instancias del proceso.

Por su parte se tiene presente que los tribunales de Alzada pudieron pronunciarse y considerar la cuestión federal y la arbitrariedad denunciada, *sin embargo sus conclusiones agravan a mi conferente por que nuevamente se incurre en arbitrariedad*, y apartándose de las constancias

aportadas a la causa, desestimaron el derecho de AFIP de verificar su crédito, el cual cumple en un todo las exigencias dispuestas en la Ley concursal.

Sobre la procedencia del recurso sobre el tema debatido, esa Excma. Corte sostiene como antecedente que:

*“Aún cuando los agravios remiten al examen de cuestiones de hecho, prueba y derecho común, materia ajena- como regla y su naturaleza, a la instancia del art. 14 de la ley 48, **no resulta óbice para abrir el recurso cuando se ha omitido dar un tratamiento adecuado a la controversia de acuerdo a los términos en que fue planteada, el derecho aplicable y la prueba rendida, habiendo establecido además que, si los argumentos expuestos por la cámara han franqueado el límite de razonabilidad al que está subordinada la valoración de la prueba, el pronunciamiento no constituye un acto judicial válido.... La arbitrariedad no es una cuestión a decidir que debe ser introducida, sino el defecto de invalidez jurisdiccional del que resguarda el art. 18 de la Constitución Nacional y que siempre ha de nacer, de modo indefectible, con el dictado del acto inválido**”.* Contreras Raul Osvaldo y otros c/ Ferrocarriles Metropolitanos S.A. 24/04/2001 Fallos 324:1344

Mediante el remedio procesal intentado por esta parte y que fuera rechazado mediante resolución del 05/05/2022, no se persigue un reexamen crítico de los medios probatorios aportados, o a tenor de lo expresado por el fallo: la “casación es un remedio extraordinario que no constituye una tercera instancia ordinaria” que por norma se encuentra vedada. Lo que ocurre es que en el presente caso, **no existe otro medio más eficaz para demostrar la arbitrariedad denunciada, que haciendo referencia a la “falta de**

valoración y merituación de la prueba arrimada a la causa", todo lo cual perjudica doblemente a mi representada, quién por un lado se ve privada de su derecho al cobro del crédito que legítimamente le corresponde – eso teniendo presente la conclusión del proceso por falta de activos-, y por otro, debe soportar las costas del proceso.

Resulta idóneo para tener por planteada la arbitrariedad en virtud de que se prescindió o no valoró una prueba legítimamente arrimada a la causa: primero, ante sindicatura al momento de insinuar el crédito de mi mandante; y segundo, en la oportunidad prevista por el artículo 37º de la LCQ.

Conforme lo prevé el art 14 de la Ley 48, la sentencia que se recurre encuadraría en el inciso c) del mismo al vulnerar entre otros principios, derechos y garantías constitucionales y la inteligencia de una ley del Congreso, ya que conforme los fundamentos que informarán este recurso, la decisión adoptada resulta en contra de la validez del título, derecho y privilegio en que se funda la Ley N° 11.683 (to 1998 modificaciones) y es materia de litigio, a la vez que resulta manifiestamente arbitraria la decisión adoptada..

A continuación enumero los requisitos que la Ley Nacional N° 48 y la jurisprudencia han consagrado para la admisibilidad de esta vía. Siguiendo la clasificación usual distingo entre requisitos sustanciales comunes a toda clase de recursos, requisitos sustanciales propios del recurso extraordinario federal y requisitos formales del mismo.

1) Requisitos comunes a todo recurso procesal.

a) Intervención de un Tribunal de Justicia: Se recurre

una sentencia emanada de vuestra Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán.

b) Existencia de juicio: Nos encontramos en el marco de un proceso judicial, sin que resulte necesario realizar mayores consideraciones al respecto.

c) Cuestión justiciable: No se ventilan temáticas ajenas a la función judicial, como pudiera ser una decisión política de los Poderes Ejecutivo o Legislativo. Se cuestionan sentencias que desestiman recursos judiciales anteriores.

d) Presencia de gravamen: No puede soslayarse en este apartado que lo que se ha afectado con el dictado de la sentencia que se recurre es la integridad presupuestaria de este Organismo, por cuanto no se admite deuda legalmente determinada y exigible, mediante interpretaciones arbitrarias que contradicen la normativa legal aplicable. Todo ello se ve agravado, por cuanto se ordenó la conclusión del proceso por falta de activo, **y por la imposición las costas** a esta parte. Es decir, no se cobrará el crédito reclamado y se deberá responder por los honorarios.

Queda claro que el fallo se afecta directamente el desenvolvimiento estructural de esta AFIP, e indirectamente las facultades de fiscalización y verificación, función esencial de este Organismo de control.

e) Interés personal: se justifica con la titularidad del derecho que intenta preservar por la vía del art.14 Ley 48. En el caso concreto, es el Fisco Nacional, titular del derecho que se intenta preservar y es también la parte del proceso a quién perjudica la sentencia que se recurre.

El fallo recurrido confirma la sentencia de Cámara del 01/03/2021, la cual a todas luces resulta arbitraria, por cuanto escudándose en un aparente análisis y valoración de los fundamentos casatorios, incurre en una clara *orfandad, atento a que se limita a manifestar que " no luce contrario a la lógica ni arbitrario, el criterio esgrimido por el Tribunal"*, lo cual no es así, lesionando gravemente nuestro derecho de defensa.

f) Interés jurídico: El interés defendido en este libelo se funda en normas vigentes. Es pasible de la tutela del Derecho, no tratándose de un mero anhelo o deseo del Organismo.

g) Subsistencia de los requisitos anteriores: De las constancias de autos y de la relación de los hechos surge que los recaudos anteriores continúan vigentes a la fecha.

2) Requisitos propios del recurso extraordinario.

Previamente aclaro que los recaudos atinentes a la cuestión constitucional se tratan en el acápite "VII) Fundamentos".

a) Sentencia definitiva.

En la presente causa la decisión del 05/05/2022 reviste indudablemente el carácter de sentencia definitiva, ya que lo resuelto en ella no resulta susceptible de modificación por ningún otro medio que no sea el presente remedio procesal, sin el cual adquiriría firmeza lo sentenciado, privando a mi representada del derecho al cobro de lo que legítimamente le corresponde.

Se trata de una sentencia que *"pone fin a la cuestión debatida en forma tal que no puede renovarse"* (fallos 137:354; 244:279 y

188:393); esto es "...efecto de cosa juzgada sustancial" (Sagües, Recurso Extraordinario, T.1, Depalma, Edic. 1984, pág. 292).-

"Si bien lo resuelto no reviste, en principio, el carácter de sentencia definitiva exigible para la procedencia del recurso extraordinario, se configura un supuesto de excepción si la cuestión debatida excede el interés individual de las partes y afecta al de la comunidad en razón de que comporta un entorpecimiento evidente en la percepción de la renta pública" F:326:4240.

En síntesis, se trata de una sentencia definitiva que da por finalizado el pleito, causando gravamen de imposible o muy difícil reparación ulterior.

b) Superior Tribunal de la causa.

La resolución de vuestra Excelentísima Corte Suprema de la Provincia de Tucumán es la de un órgano competente para decidir en última instancia la cuestión resuelta, por lo que la única y última vía de subsanación es la del Recurso Extraordinario Federal (conf. Sagües, Nestor Pedro, Derecho Procesal Constitucional, T.2, pág. 635, Ed. Astrea Bs.As. 1992).

c) Introducción de la cuestión federal y mantenimiento en las sucesivas instancias.

La cuestión federal se planteó en las sucesivas instancias de la litis: revisión del 12/11/2014, expresión de agravios por apelación del 22/12/2017, contra sentencia del 22/02/2021 que priva de fuerza ejecutoria parte del crédito fiscal, y Casación del 01/06/2021. Asimismo los diferentes agravios que la suscitan fueron expuestos y mantenidos en cada una de las citadas presentaciones, como también la tacha de arbitrariedad.

d) Acordada n° 4/2007 (CSJN).

De la lectura del presente surge que cumple en su estilo y extensión con los recaudos de la Acordada citada. Se acompaña además la caratula prevista por la misma.

e) Forma y plazo de la presentación.

La sentencia que se recurre ha sido notificada a esta parte el día sábado 07/05/2022, mediante cédula en casillero digital, interponiéndose el presente recurso dentro del plazo previsto por el artículo 257 del C.P.C. y C.N.

Conforme lo establecido por nuestra Corte Suprema mediante Acordada N° 6803/48 los tres (3) días de comparendo obligatorio semanal fijados para las notificaciones son: Lunes, Miércoles y Viernes; o subsiguiente día hábil en caso de feriado (reglamentación art. 3 de la Ley N° 2.199). La notificación se tendrá por realizada el primer día hábil de comparendo obligatorio posterior a la fecha en que la cédula fue depositada en el casillero (art. 3, Ley N° 2.199). De modo que el efecto notificador se produce el día viernes 09/05/2022.

Por ende el presente se encuentra interpuesto y fundado dentro del plazo de diez (10) días previsto por el artículo N°257 del C.P.C.C.N, ante el mismo Tribunal que resolvió en autos, es decir, vuestra Excelentísima Corte.-

V).- RELACIÓN DE LOS HECHOS – ANTECEDENTES DE LA CAUSA .

Con fecha 12 de noviembre de 2014 mi representada promueve incidente de revisión contra la sentencia del art 36 LCQ de fecha 14/10/2014, mediante la cual se resuelve declarar no verificado parte del crédito insinuado por AFIP-DGI.

Entre los argumentos que fundamentan nuestra revisión, residen en la inconducta fiscal de la fallida, y las numerosas presentaciones de declaraciones juradas rectificativas, situación que llevaron tanto a sindicatura como al judicante a incurrir en el error de considerar que el Organismo Fiscal presentara solicitudes de créditos duplicadas y/o repetidas.

Con fecha 15/11/2017 se dicta resolución mediante la cual se dispone hacer lugar parcialmente al incidente de revisión incoado por AFIP.DGI..

El crédito no admitido corresponde a las Boletas de Deudas Nros. 40515/01/1999, N°44315/02/2006, N°218/01/1999 y N°41/04/1999, por considerar que esta parte no mencionó “montos ni graduación” que comprenden los créditos contenidos en dichos certificados de deuda.

Como consecuencia de ello, mi representada interpuso recurso de apelación, con expresión de agravios del 26/12/2017, el cual luego de meritudo fue desestimado mediante sentencia del 19/03/2021, confirmando resolución de primera instancia, la cual contraria principios constitucionales tales como la defensa en juicio, no efectúa una correcta valoración de las pruebas obrantes en autos, como así también respecto de los fundamentos esbozados por esta parte en la expresión de agravios, e incurre en arbitrariedad.

En virtud de ello, se interpuso recurso de casación con fecha 01/06/2021, con el objeto que nuestra Excma. Corte restableciera el sistema de justicia vulnerado.

Sin embargo, con fecha 05/05/2022, se dictó resolución por la cual se dispuso declarar inadmisibile el remedio procesal intentado.

Manteniéndose el agravio de mi parte, y encontrándose vulnerado el derecho que la inviste, es que se solicita se habilite el remedio extraordinario federal con el objeto de restablecer la justicia del caso.

En su mérito y por los motivos que informarán este recurso extraordinario, demostraremos que la arbitrariedad se encuentra configurada y afectada la Cuestión Federal.

VI).- CUESTION FEDERAL.

La Excma. Corte de Justicia de la Nación tiene dicho en numerosos precedentes que *"El objeto del recurso extraordinario es **el mantenimiento de la supremacía constitucional** y no la sumisión a la Corte de cualquier causa en que pueda existir agravio o injusticia a juicio del recurrente (Fallos 194:220), ya que aquél no se propone rectificar toda injusticia que pueda existir en el fallo apelado, sino mantener como queda dicho, la supremacía nacional (Fallos 235:972; 247:173).*

"En efecto, desde antiguo ha sido un supuesto imprescindible para la viabilidad del recurso del art. 14 de la ley 48 que la cuestión federal haya sido resuelta en forma contraria al derecho federal invocado, conforme a la fuente que inspiró el contenido de este recurso de excepción, desde que como siempre se dijo la razón de ser de esta apelación excepcional radica en la necesidad de asegurar la supremacía de la constitución, tratados y leyes nacionales que consagra el art. 31 de la C.N". Dictamen del Procurador General Fallo " Recurso de hecho deducido por Eduardo Rodriguez Lemos, Fiscal de Estado de la Provincia de Mendoza y Pedro Garcia Espetxe por el Poder Ejecutivo de la provincia en la causa Gigena Julio Cesar y otros c/ Provincia de Mendoza".

En el presente, existe cuestión federal por que una de las partes afectadas es el Estado Nacional, se persigue el reconocimiento del crédito por Aportes y contribuciones a la Seguridad Social, y a su vez, se afecta su

fuerza principal de ingresos, debidamente consagrada y protegida en el artículo 4 de la Constitución Nacional, situación que se verifica, al no reconocerse el derecho al cobro del crédito que legítimamente le corresponde.

Al respecto, Nuestra Excma Corte Nacional, sostuvo que "... se configura un supuesto de excepción si la cuestión debatida excede el interés individual de las partes y afecta al de la comunidad en razón de que comporta un entorpecimiento evidente en la percepción de la renta pública ..." (fallos 326:4240). - Lo subrayado, nos pertenece.

El recurso extraordinario resulta formalmente procedente toda vez que se ha puesto en tela de juicio la validez de un acto de autoridad nacional y la decisión ha sido contraria a tal validez (art. 14 inc 1 ley 48) autos "Rodriguez Varela, Florencio c/ Corte Suprema de Justicia de la nación s/ordinario" 23/12/1992.

Es decir que de las probanzas de autos, puede V.E. cotejar que el procedimiento tramitado en la determinación de la deuda es legítimo, las normas involucradas son constitucionales, y se resguardó el derecho de defensa y el debido proceso. No obstante ello, en virtud de una falta total de análisis y valoración de la prueba y hechos denunciados por esta parte, las instancias intervinientes desestimaron el crédito en discusión.

Por ello, los fundamentos brindados en la sentencia casatoria denotan claramente -tal como lo expondré- **arbitrariedad** en la conformación de la misma.

El recurso extraordinario planteado resulta formalmente admisible por hallarse en discusión la validez de un acto de autoridad nacional, así

como **el alcance de normas que integran el marco regulatorio de la percepción de impuestos nacionales, de carácter federal** y la decisión del tribunal superior de la causa fue contraria al derecho en que esta parte funda su pretensión (art. 14 inc 3 de la ley 48), como así mismo, al encontrarse controvertido el alcance que cabe asignar a una norma de derecho federal (Régimen de Facilidades de Pagos).

Así, el fallo que se ataca es producto de una deliberada voluntad, no relacionada con las constancias documentales obrantes en autos, y vulnera los principios de derecho que rigen el procedimiento del régimen tributario nacional.

VII).- REFUTACIÓN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS FUNDAMENTOS INDEPENDIENTES:

Para resolver de manera adversa a los intereses de esta parte, nuestra Corte Suprema de Justicia de Tucumán, sostuvo que:

El recurso intentado es inadmisible por no *"...cubrir los extremos exigidos por la norma de rito para el acceso a esta instancia extraordinaria..."* .

Agrega, que *"...La casación es un remedio extraordinario que no constituye una tercera instancia ordinaria..."* (cita doctrina de Hitters). Agrega, jurisprudencia que recepta tal presupuesto, en el sentido de que: *"...la casación no es una tercera instancia y no está en la esfera de sus poderes valorar la prueba, ni juzgar los motivos que formaron la convicción de la Cámara..."*.-

Crítica: **Éste fundamento se repite casi textualmente en todos los antecedentes en que el Organismo Fiscal es parte, lo que**

vendría a confirmar la arbitrariedad denunciada, y habilitaría la instancia extraordinaria intentada.

En la presente causa el único medio eficaz por el cual podemos demostrar la existencia de arbitrariedad en la conformación de los fallos recurridos, no es otra que, peticionando, reclamando o solicitando una revisión de los antecedentes que conforman y prueban la existencia, cuantía, y legalidad del crédito reclamado, y el exhaustivo análisis de los argumentos de nuestros recursos. Lo cual hasta la fecha no se produjo, motivo por el cual desde ya solicito a VE que habilite la presente instancia, y con ello, no avale los hechos y circunstancias denunciados en la presente causa.

Tanto la prueba arrojada como los fundamentos brindados por esta parte para demostrar la exigibilidad y reconocimiento del crédito en discusión, nunca fueron valorados debidamente.

Así, llegamos a la instancia casatoria en la cual el Excmo Tribunal considera que *"...el razonamiento sentencial que se cuestiona, luce adecuado y congruente con la decisión a la que arriba el Tribunal en cuanto afirma que no se trata de negar la autenticidad de la documentación acompañada por el organismo recaudador, sino que sostuvo la misma no es suficiente para acreditar ella acreencia.."* Agrega que *"...no luce contrario a la lógica ni arbitrario, el criterio esgrimido por el Tribunal, mientras que el recurso no atacó los argumentos del fallo o sea, la idea dirimente que forma la base fáctica de la decisión sobre los créditos rechazados..."* .- Concluye *"...criticar no es lo mismo que disentir..."*

Crítica:

El fallo en crisis evidentemente desconoce los motivos o argumentos que se esgrimieron durante éste proceso como fundamento del rechazo del crédito en discusión.

Primeramente se adujo que el Fisco no indicó el monto del crédito que se reclama. En contrario, se manifestó que surgen de los puntos de revisión y agravios los montos y detalles del crédito. A más de ello, los certificados de deuda, cuentan con un detalle pormenorizado de los conceptos, períodos e importes reclamados.

Posteriormente, el fallo de Cámara consideró que el monto del crédito solicitado “ *no se determina con precisión, surgiendo contradicciones entre las sumas declaradas por el deudor en las DD.JJ. Originales, con las rectificaciones posteriores y las diferencias que pretende verificar el Fisco*” La cuestión de la supuesta duplicidad de créditos, fue dilucidada por esta parte, en razón de que la sumatoria de los créditos peticionados en las boletas de deudas, da como resultado el monto total la DD.JJ. rectificativa del impuesto y períodos supuestamente duplicados. No obstante ello, esto no fue considerado por el fallo.

Y finalmente, el fallo en crisis, considera que nuestro descargo constituye “un mero disenso” que resulta insuficiente para tener por motivado el recurso.

Sin embargo, mediante sentencia del 30/08/2021 se evidenció lo siguiente: “*El recurso fue deducido en término; el recurrente realizó el depósito establecido en el art. 752 CPCCT, conforme surge de la boleta agregada digitalmente en autos; y se trata de una sentencia que pone fin al pleito o hace imposible su prosecución (art. 748 procesal). A su vez, de la lectura del memorial*

recursivo resulta que se basta a sí mismo, invoca la infracción a normas de derecho, y propone doctrina legal aplicable al caso. En mérito a lo considerado, el recurso reúne los recaudos legales para la apertura de la instancia recursiva por lo que corresponde su concesión”.

El fallo del 05/05/2022, escudándose en un aparente análisis y valoración de nuestros fundamentos, evidencia a las claras arbitrariedad en su conformación. Lo que persigue esta parte es sólo un adecuado servicio de justicia, en el cual se garanticen derechos fundamentales, como la igualdad, defensa y derecho a sentencia justa y debidamente fundada. Todo ésto se encuentra vulnerado por la existencia de fallos contradictorios y arbitrarios. Asimismo, se incurrió en un claro exceso de rigor formal manifiesto, al considerar que esta parte no cumplió con los requisitos de probar la existencia y cuantía del crédito solicitado y sus privilegios, cuando conforme se expuso, y las constancias obrantes en la causa, ello no es así.

Por todo ello, y encontrándonos dentro del marco de excepción para acceder a la vía extraordinaria, ello por verificarse la causal de arbitrariedad, cabe tener presente que los conceptos rechazados corresponden a créditos por Aportes y Contribuciones de la Seguridad Social, y nuestra tacha de arbitrariedad se sustenta en los hechos y pruebas obrantes en la causa, situación que amerita la revocación del acto que se ataca, y que se ordene el dictado de un nuevo pronunciamiento.

Sentado ésto, es decir – arbitrariedad grave como excepción del remedio casatorio y no un mero disenso- el fallo en crisis y el de sus predecesores, restan valor a la prueba arrimada, a punto tal, de negar su

existencia y reconocimiento, por lo cual consideramos que los argumentos de rechazo resultan infundados, y lesionan gravemente el derecho de defensa,

Reitero, no se reclama un reexamen de la prueba o del crédito pretendido, lo que se persigue es el aseguramiento del derecho al cobro del crédito que legítimamente le corresponde a mi representada. Es decir, la Justicia del caso.

En definitiva, se ha objetado la validez e inteligencia de normas de carácter federal y la sentencia ha sido contraria al derecho que mi parte funda en ellas (arts. 14; incs 10 y 30 de la ley 48), encontrándose gravemente afectado el bien jurídico tutelado por AFIP, es decir, las Rentas Públicas (art. 4 C.N.), motivo por el cual solicito la intervención de esa Excma. Corte a efecto de restablecer el derecho vulnerado impropiaamente.

La infracción denunciada, excede el interés de los litigantes, compromete la debida prestación del servicio de justicia y pone en crisis las instituciones del sistema jurídico, generando gravedad institucional.

Entre otros fallos, tiene dicho nuestra Suprema Corte Justicia de la Nación: PLANTEO DE ARBITRARIEDAD - CUESTION FEDERAL
"...Sin perjuicio de la cuestión federal invocada, si el recurrente planteó la arbitrariedad de la sentencia respecto de esos agravios federales, corresponde tratar en primer término tales agravios pues de existir arbitrariedad no habría sentencia propiamente dicha. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-Martinez y Staneck SA y CA c/ Agroar Máquinas Agrícolas S.A. s/ordinario M. 655. XLIX. REX01/12/2015"

"CUESTION FEDERAL - PLANTEO DE ARBITRARIEDAD - RECURSO EXTRAORDINARIO - Si los agravios referentes a la interpretación de derechos constitucionales y a la arbitrariedad atribuida a la sentencia impugnada

se encuentran inescindiblemente ligados entre sí, corresponde examinar los planteos de manera conjunta. D., M. A. s/ declaración de incapacidad - D. 376. XLIX. REX07/07/2015 Fallos: 338:556”

Que claro que nos encontramos frente a un fallo que a todas luces resulta arbitrario, y que, en tales condiciones media relación directa e inmediata entre lo decidido y las garantías invocadas de propiedad, defensa en juicio y debido proceso que tutelan los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional, por lo que corresponde su descalificación como acto jurisdiccional válido (art. 15 de la ley 48)”.

Es decir, que las circunstancias y hechos hasta aquí denunciados, ameritan por sí, la intervención y admisión del presente remedio extraordinario. Por todo ello solicitamos que VE no avale los hechos e irregularidades denunciadas por esta parte, y resuelva conforme a derecho.

VIII .-)SENTENCIA ARBITRARIA:

Al respecto de la posibilidad de abrir la vía extraordinaria de excepción, fundada en arbitrariedad de sentencia, esa Excm. Corte tiene dicho que:

“... La arbitrariedad no es una cuestión a decidir que debe ser introducida, sino el defecto de invalidez jurisdiccional del que resguarda el art. 18 de la Constitución Nacional y que siempre ha de nacer, de modo indefectible, con el dictado del acto inválido”. Contreras Raul Osvaldo y otros c/ Ferrocarriles Metropolitanos S.A. 24/04/2001 Fallos 324:1344

Es decir que procede el recurso extraordinario, no obstante tratarse de aplicación de normas procesales o de derecho común y de cuestiones

de hecho, cuando la sentencia recurrida es arbitraria y carente de fundamento jurídico pues *no sólo hay arbitrariedad cuando se resuelve contra; o con prescindencia de lo expresamente dispuesto por la ley respecto al caso, sino también cuando se prescinde de pruebas fehacientes, regularmente traídas a juicio.*

La sentencia casatoria de fecha 05/05/2022 resulta evidentemente arbitraria, ello por cuanto no se reclama un nuevo análisis, sino que lo que se denuncia es una clara violación al derecho de defensa, derecho a una sentencia debidamente fundada, infracción a una norma de derecho, todo lo cual causa gravamen actual e irreparable.

Omitir la consideración de pruebas decisivas para la solución del pleito: Las cuestiones referentes a la selección de las pruebas y su interpretación y evaluación por los jueces son, por principio, ajenas a la órbita del recurso extraordinario. **Sin embargo,** el mismo ha sido considerado viable en aquellos supuestos en que se ha *omitido* toda consideración sobre pruebas evidentemente decisivas para la solución del caso, *o cuando se las ha interpretado de manera caprichosa.* En el caso, falta de merituación de la prueba existente en autos, hasta el punto de negar su existencia, ello en detrimento del crédito fiscal reclamado.

IX.-) GRAVEDAD INSTITUCIONAL

Surge evidente, conforme a los argumentos que se han expresado, que con la sentencia que se recurre, se excede ampliamente el interés del Estado Nacional y del Fisco Nacional, ya que la misma pone en juego la política

de recaudación fiscal, en permanente lucha contra la evasión fiscal, y obsta cumplir con la procura del bien común o bienestar general.

“Debe considerarse viable el recurso extraordinario del art. 14 de la ley 48, pese a que el debate versa sobre una norma de índole procesal ajena a dicha apelación, cuando la cuestión debatida afecta directamente a la comunidad al incidir en la percepción de los tributos”. (CS, diciembre 3- 1991) ED, 148-382.-.

En el caso se configura un supuesto de excepción en tanto la cuestión en debate excede el interés individual de las partes y afecta el de la comunidad en razón de su aptitud para incidir en la gestión de las finanzas del estado y en la percepción de la renta pública (Fallos: 314:1714; 315:683; 316:3019; 318:1413, entre otros).

Consentir el fallo en crisis es poner en riesgo todo el Sistema Tributario, y el derecho de mi mandante de exigir lo que el ordenamiento jurídico le ha concedido, lo que a su vez, podría proyectarse sobre otros casos similares.

Asimismo y conforme se expuso, en el caso se ha objetado la validez e inteligencia de normas de carácter federal y la sentencia ha sido contraria al derecho que mi parte funda en ellas (arts. 14; incs 10 y 30 de la ley 48). Encontrándose afectado el bien jurídico tutelado por AFIP, es decir, las Rentas Públicas (art. 4 C.N.), y el el derecho de defensa, solicito la intervención de la Excma. Corte Suprema de la Nación, a efectos de que se restablecer el derecho vulnerado impropriamente.

En consecuencia debe hacerse lugar al presente recurso extraordinario y reestablecer la vigencia de la norma federal, declarando que se ha

incurrido en arbitrariedad manifiesta, ordenando la admisión de nuestro recurso de casación, asegurando de esta manera garantías fundamentales.

X).- PETITORIO-

Por las razones expuestas a la Excma Corte Suprema de Justicia, pido:

- 1).- Me tenga por presentado y por constituido domicilio a los efectos del tratamiento del recurso.-
- 2).- Se den por cumplidos los requisitos de admisibilidad del recurso extraordinario.-
- 3).- Se conceda el recurso interpuesto y oportunamente se revoque la sentencia de la Excma. Corte de Justicia de Tucumán, conforme se solicita.-
- 4) Sin costas, ello sin perjuicio de imponerlas por su orden, en razón de que existían razones para acudir al remedio procesal intentado..

Proveer de conformidad por ser

JUSTICIA.-